

PAZ Y SEGURIDAD

EL BAJO ATRATO: UN CONFLICTO QUE SE PERPETÚA

Santiago Luque Pérez / Pilar Puentes Espinosa

Diciembre 2020



El Bajo Atrato, en el noroccidente de Colombia, ha sido testigo del olvido estatal, la violencia de las guerrillas, los paramilitares y la Fuerza Pública. En medio de estos conflictos han aparecido los proyectos de palma que, en muchos casos, han utilizado terrenos arrebatados a las comunidades.



En medio de este conflicto están las comunidades afro e indígenas, que con la Constitución de 1991 vieron la posibilidad de tener tituladas sus tierras. Sin embargo, lo único que han recibido es una violencia que no parece desaparecer, a lo que se suma que con la firma del Acuerdo de paz en 2016 llegó la disputa por este corredor del narcotráfico.

PAZ Y SEGURIDAD

EL BAJO ATRATO: UN CONFLICTO QUE SE PERPETÚA

En colaboración con:

**RUTAS DEL
CONFLICTO**

CONTENIDO

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | INTRODUCCIÓN | 4 |
| 2 | DE LAS GUERRILLAS LIBERALES A LAS FARC Y EL EPL | 5 |
| 2.1 | Las guerrillas buscan el control del Bajo Atrato | 5 |
| 2.2 | La reconciliación y la creación de la Coordinadora Nacional Guerrillera | 6 |
| 3 | EL CONTROL DE LA REGIÓN POR LOS PARAMILITARES Y LA FUERZA PÚBLICA | 8 |
| 3.1 | 'A sangre y fuego': la disputa por el Bajo Atrato | 8 |
| 3.2 | El Ejército y los paramilitares: Cacarica y Génesis | 9 |
| 3.3 | Los proyectos agroindustriales y de minería | 11 |
| 4 | LA RECONFIGURACIÓN DEL CONFLICTO | 12 |

1

INTRODUCCIÓN

El departamento del Chocó se encuentra ubicado al noroccidente del país, siendo el único de Colombia que tiene frontera con Panamá y salida al océano Pacífico y al mar Caribe. El Atrato es su río más largo e importante, atravesándolo de sur a norte. Sus riberas, así como las de los afluentes que lo alimentan, son el hogar de comunidades indígenas y afro.

El río se encuentra dividido en las cuencas alta, media y baja. La última está conformada por los municipios de Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí, en el Chocó. Y Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá, en Antioquia. Esta zona también hace parte de la región Urabá-Darién, reconocida históricamente por sus cultivos de banano. Es asimismo una región en la cual el gobierno nacional ha dado prioridad a la agroindustria de la palma. Y en donde se han promovido megaproyectos que buscan permitir la conexión del Caribe y el Pacífico, que no han tenido éxito dada la oposición de comunidades y ambientalistas por la biodiversidad única en el mundo que existe en estas selvas chocoanas.

En 1991 la presión de la ciudadanía y la voluntad política permitió la expedición de una nueva Constitución política, que derogó un documento que tenía más de cien años, actualizando las normas a las necesidades del país. Entre los principales logros obtenidos estuvo el reconocimiento de un Estado multicultural que reconoce la diversidad étnica y cultural. En consecuencia, en 1993 se expidió la ley 70, que desarrolla el artículo 55 de la Constitución y creó los Consejos Comunitarios, permitiendo la agrupación de las comunidades afro del Pacífico colombiano bajo esta figura. Una de las principales promesas era la titulación de la tierra.

Lo que se veía como una oportunidad para formalizar la tierra de las familias afrocolombianas que llevan centurias habitando estos terrenos, se convirtió en algunas zonas, como la del Bajo Atrato, en un aumento de la violencia por parte de los grupos armados. Esta región, que había sido controlada por grupos guerrilleros del Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), pasó a ser tomada por grupos paramilitares a cargo de Carlos y Vicente Castaño, quienes llegaron desde el departamento de Córdoba.

Para las comunidades en el territorio, que prefieren guardar el anonimato de su identidad por seguridad, la persistencia del conflicto está ligada al narcotráfico. Reconocen como punto de quiebre y recrudescimiento del conflicto armado el ingreso de los grupos paramilitares a la región de la mano del Ejército Nacional con la operación Génesis en 1997, coordinada al mismo tiempo con la incursión de las autodefensas a Cacarica. De acuerdo con cifras de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, desde 1996 los municipios del Bajo Atrato chocoano tuvieron un aumento considerable de las personas registradas.

Los investigadores añaden que la llegada de los cultivos de palma para la extracción de aceite no fue una casualidad: fue una estrategia usada por los grupos paramilitares para perpetuar el control en la zona, lavar dinero proveniente del narcotráfico y despojar de la tierra a quienes históricamente la habían habitado. Un plan que según la investigadora Yamile Salinas no nació en Colombia, fue importado del exterior, de países como Indonesia, Guatemala y Malasia.

2

DE LAS GUERRILLAS LIBERALES A LAS FARC Y EL EPL

La Violencia, con sus iniciales en mayúscula, corresponde al periodo de conflicto bipartidista entre liberales y conservadores que empezó en 1925 y terminó en 1958. El asesinato de político liberal Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948 dio inicio al recrudecimiento de los actos violentos que se expandieron desde Bogotá, la capital, a gran parte del país.

Según el informe *La violencia en Colombia: estudio de un proceso social*¹, el Chocó se encontraba “marginado de la vida económica del país”, por lo cual el conflicto llegó principalmente del departamento de Antioquia, de guerrilleros liberales que se escondieron en las selvas chocoanas. Los desplazamientos de poblaciones también ocurrieron desde los municipios antioqueños de Mutatá, Chigorodó, Carepa, Apartadó y Turbo hacia el Bajo Atrato.

La amnistía y posterior desarme de las guerrillas liberales dieron fin a este periodo en 1958. Sin embargo, el asesinato de los líderes amnistiados y los incumplimientos del gobierno generaron desconfianza y llevaron al rearme de algunos grupos.

En 1967 se creó el Ejército Popular de Liberación (EPL) en el departamento de Córdoba, como expresión armada del Partido Comunista de Colombia-Marxista Leninista (PC-ML), el cual seguía la tesis maoísta de los tres mundos. Tres años antes, en el departamento del Tolima se

habían fundado las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) después del asesinato del dirigente agrario, guerrillero y político Jacobo Prías Alape, conocido como *Charro Negro*. Estas dos guerrillas serían las de mayor influencia en el Bajo Atrato.

2.1 LAS GUERRILLAS BUSCAN EL CONTROL DEL BAJO ATRATO

En la quinta conferencia de las Farc realizada en 1974 se decidió expandir el accionar del grupo a otras zonas del país para evitar ser cercados por las Fuerzas Militares. Así se dio nacimiento al quinto frente Urabá-antioqueño, cerca de la frontera con Chocó. En la sexta conferencia, en 1978, se habló de la necesidad de aumentar la presencia en más zonas del país, buscando tener al menos un frente por departamento. Por lo que a inicios de los ochenta el grupo ingresó y empezó a tener una fuerte presencia en el Bajo Atrato. De igual manera lo hizo el EPL, que inició su accionar en el departamento de Antioquia, antes de su expansión hacia el Chocó.

Desde 1982 se tiene conocimiento de que ambos grupos tenían presencia en la zona. El Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), un centro de estudios de la sociedad civil que sigue el conflicto armado desde la década de los setenta, por medio de entrevistas recogidas en uno de sus informes del Bajo Atrato² encontró que la presencia de los guerrilleros no se relacionaba con una confrontación armada, sino que buscaban interve-

1 Informe realizado en 1962 por la Comisión Investigadora creada en 1958 por la Junta Militar que gobernó hasta ese año, antes de lo que se conoció como el Frente Nacional. La comisión buscaba establecer las causas de la violencia en el país. Sus autores fueron Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna.

2 Informe editado en 2020 y titulado *Violencia, racismo y conflictos sociambientales. El despojo de tierras en el Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó*.

nir en “asuntos administrativos, económicos y sociales, que apuntaban a ganar reconocimiento militar y político y configurarse como una especie de Estado paralelo”, por lo que su presencia no generaba pánico en las poblaciones.

Las guerrillas funcionaban como segunda instancia o instancia extraordinaria de las decisiones que tomaban las juntas de acción comunal (JAC). Donde había presencia del Ejército o de grupos paramilitares, el control ejercido por las guerrillas no era permanente. Aunque según ellos practicaban una “justicia ejemplarizante”, asesinando a quienes no colaboraban o se les señalaba de apoyar grupos paramilitares.

Los enfrentamientos entre los dos grupos guerrilleros en la región comenzaron en el Urabá en 1978, cuando Bernardo Gutiérrez se retiró del frente quinto de las Farc junto con once personas y se unió al EPL. Se le acusó de haber robado armamento, de ser un infiltrado y de traición.

2.2 LA RECONCILIACIÓN Y LA CREACIÓN DE LA COORDINADORA NACIONAL GUERRILLERA

Desde que llegó a la presidencia en 1982, Belisario Betancur (1982-1986) le apostó al fin de la violencia por medio del diálogo. De ahí nacieron las primeras conversaciones de paz con los grupos guerrilleros, que habían estado antecedidas por la creación de una Comisión de paz durante el gobierno de Julio César Turbay (1978-1982). El gobierno nacional expidió una ley de amnistía que llevó a la liberación a la mayoría de los presos de las guerrillas. El 28 de marzo de 1984 el gobierno nacional y las Farc firmaron un cese al fuego bilateral, que iniciaría dos meses después.

Un mes después de firmarse el cese al fuego, el 30 de abril, el narcotráfico asesinó al ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. En un reportaje de 2018, el diario *El Tiempo* recordó este hecho así: “En otras palabras, se promovían acciones de paz al tiempo que empezaba una nueva guerra”.

La tregua dio nacimiento también al partido político Unión Patriótica (UP), fundado en mayo de 1985 como una estrategia de las Farc para hacer política sin armas. Sin embargo, desde el proceso de creación del mismo, sus militantes empezaron a ser asesinados. En noviembre de 1985 la toma del Palacio de Justicia por parte de la guerrilla del M-19, y la retoma por parte de las Fuerzas Armadas le dieron un golpe a los diálogos de paz.

Durante estos años las tensiones entre las Farc y el EPL disminuyeron. El fin de los diálogos de paz con el gobierno nacional dio paso a la creación de la Coordinadora Nacional Guerrillera (CNG), en la que las Farc no participaron. Estas últimas firmaron una prórroga del cese al fuego y se consolidó la participación de la Unión Patriótica (UP) como movimiento político alternativo a los partidos tradicionales, con la elección de cinco senadores, nueve representantes, veinte diputados y trescientos cincuenta y tres concejales.

En el informe mencionado, el Cinep dice que durante esta etapa el proyecto político de la UP tomó fuerza en el Urabá antioqueño y chocoano, donde el poder local se sintió amenazado y recurrió a los grupos paramilitares. Durante los años posteriores continuó el asesinato de los líderes de este partido, que según informe del Centro Nacional de Memoria Histórica dejó más de cuatro mil personas asesinadas, secuestradas o desaparecidas.

El cese al fuego fracasó y las esperanzas de paz terminaron. La Coordinadora Guerrillera se interesó en vincular a las Farc en su proyecto. Así, en 1987 se constituyó la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), que fue el resultado de la unión para la realización de acciones conjuntas entre las guerrillas del país. Dicha Coordinadora estuvo activa hasta 1994, aun cuando desde 1990 se empezó a debilitar con la dejación de armas del M-19. Un año después lo hicieron el EPL, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL) y la Corriente de Renovación Socialista, una facción del Ejército de Liberación Nacional, dejando solo a las Farc y al grupo mayoritario del ELN.

Del proceso de paz con el EPL nació el partido político Esperanza, Paz y Libertad, del que 95% de los miembros eran desmovilizados de este grupo guerrillero. Para las

Farc este proceso fue una traición y los declaró objetivo militar, con lo que se vino una ola de asesinatos contra ellos. Uno de los hechos más recordados es la masacre de La Chinita, un barrio de invasión y obrero de Apar-

tadó, Bajo Atrato antioqueño, donde guerrilleros de las Farc ingresaron y asesinaron a treinta y cinco personas, varias de ellas simpatizantes del partido creado por los desmovilizados del EPL.

3

EL CONTROL DE LA REGIÓN POR LOS PARAMILITARES Y LA FUERZA PÚBLICA

Aunque los grupos paramilitares no estaban ausentes en la región, en la segunda mitad de la década de los noventa la lucha por el control territorial tomó fuerza. Para la investigadora Yamile Salinas, la Constitución aprobada en 1991 abrió la posibilidad de la titulación de la tierra para las poblaciones afro, por lo que la formalización de estos terrenos cerraba la posibilidad de los grandes proyectos agroindustriales, de puertos y vías.

El libro *Guerras recicladas* de María Teresa Ronderos dice que en 1993 los grupos paramilitares a cargo de la casa Castaño estaban librando, al lado de los *Pepes*, Perseguidos por Pablo Escobar, un grupo de narcotraficantes, una guerra contra Escobar. Ese año Fidel Castaño entabló conversaciones con el frente quinto de las Farc para buscar una alianza y dividirse el control territorial del Urabá-Darién.

Según testimonios de paramilitares ante Justicia y Paz, cansado de la guerra que sostenía contra Pablo Escobar, Castaño decidió buscar una alianza con sus enemigos. Uno de los testimonios es el de un sargento retirado del Ejército, quien asegura que oyó las comunicaciones que sostenía el hermano mayor de los Castaño con las Farc, en las que la guerrilla planeaba cederle las regiones de Nueva Antioquia, Urabá, Chocó y Córdoba, así como coordinar una operación conjunta. El plan nunca se concretó.

La desmovilización del EPL había dejado un grupo residual que no se desmovilizó y que fue combatido tanto por la guerrilla de las Farc como por los grupos paramilitares y las Fuerzas Armadas. En 1996 el frente Pedro León Arboleda, que operaba en los límites entre Antioquia y Chocó, se entregó a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) al mando del

paramilitar Carlos Castaño Gil. El nombre de Juan de Dios Úsuga David, *Giovanny*, que más adelante volverá a cobrar importancia, hizo parte de quienes cambiaron de bando ese año.

3.1 'A SANGRE Y FUEGO': LA DISPUTA POR EL BAJO ATRATO

En 1995 se creó el grupo de los Guelengues en Necoclí, Antioquia, bajo las órdenes del ganadero Carlos Alberto Ardila Hoyos, alias *Carlos Correa*. Según la sentencia del proceso de Justicia y Paz en contra del bloque Elmer Cárdenas, los hermanos Castaño eran los comandantes generales mientras que Correa respondía por las finanzas de la organización.

En octubre de ese mismo año, al ver que faltaban personas para las incursiones paramilitares y llegar al Bajo Atrato, la casa Castaño creó el grupo de Los 70 en la zona rural del municipio de Necoclí. A lo que se le sumó el grupo Chocó, con treinta hombres, para realizar las incursiones en Unguía, Acandí y Riosucio. Estas estructuras se modificarían con la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia en 1997, para unirse bajo el nombre del bloque Elmer Cárdenas.

Las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá realizaron el primer "operativo" el 10 de febrero de 1996 en Unguía. Con setenta hombres llegaron al campamento del frente 57 de las Farc para desplazar a la guerrilla a las montañas. Para esa incursión fue necesaria la ayuda del bloque Alex Hurtado, del eje bananero, y unos hombres que respondían directamente a los hermanos Castaño, como lo evidencia la sentencia del bloque Elmer Cárdenas.

Dos días después de la incursión las Farc respondieron, obligando a las autodefensas a replegarse y abandonar el municipio de Unguía. En el enfrentamiento, estas últimas asesinaron a un hombre, tras ser acusado de colaborar con la guerrilla.

El 23 de febrero, los paramilitares regresaron a la zona, pero esta vez decidieron entrar por Acandí, ubicado al lado de Unguía, y desembarcaron en el sector conocido como Balboa, donde ocurrieron los primeros enfrentamientos con las Farc. Este recorrido culminó en el corregimiento de Titumate, donde las tropas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá acamparon para su siguiente incursión. Durante el recorrido por los municipios chocoanos y el río Tigre, como lo muestra la sentencia del bloque Elmer Cárdenas, alias *Ramiro*—persona no identificada en las audiencias de Justicia y Paz— era el encargado de ir señalando a la población que supuestamente colaboraba con la guerrilla.

Los paramilitares siguieron el recorrido por los municipios de Unguía y Acandí dejando por lo menos ochocientas víctimas. En Acandí la violencia había empezado un año antes, el 4 de noviembre de 1995, cuando las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá perpetraron una masacre. Torturaron y asesinaron a siete personas que pertenecían a la Unión Patriótica. Según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, durante 1995 y 1996 las Autodefensas perpetraron otras tres masacres.

El 20 de diciembre de 1996 los grupos de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá realizaron la incursión, denominada la retoma de Riosucio. Fredy Rendón, *el Alemán*, estuvo al frente de la incursión tomando control del río Atrato, para lo que necesitó ciento treinta paramilitares. Según sus declaraciones, Elmer Cárdenas fue el encargado de coordinar con la Policía de Quibdó y Riosucio las ayudas para la toma. También contaron con activos de la brigada 17 del Ejército y exmiembros de las Farc, según los testimonios de once postulados a Justicia y Paz del bloque Elmer Cárdenas.

Fredy Rendón, en audiencia libre en 2010, contó cómo la casa Castaño había ordenado que él y Raúl Emilio Hazbún Mendoza, *Pedro Bonito*, viajaran en una avio-

neta desde el aeropuerto Enrique Olaya Herrera de Medellín hasta Quibdó para reunirse con un oficial de la Policía. En dicha reunión el oficial se comprometió a no realizar ningún operativo. Como lo señaló *Verdad Abierta*, *el Alemán* agregó en la diligencia judicial:

Mandaría un capitán de la Policía secreta o de su inteligencia, para que asumiera el puesto de Policía en Riosucio, para que eso no se nos saliera de las manos y que nosotros pudiéramos desarrollar la operación. El coronel sabía además que se iban a hacer unas retenciones en la cabecera municipal y que se les iba a dar muerte. Y así pasó.

A las 6:30 de la mañana, en pangas desde Sautatá, Unguía, los paramilitares desembarcaron en Riosucio, donde simulaban un enfrentamiento con la Policía. Varios minutos después, con lista en mano, llamaron a supuestos guerrilleros, colaboradores o auxiliares y asesinaron y torturaron a cinco personas.

La llegada de los grupos paramilitares marcó un cambio para las comunidades en las dinámicas del conflicto, ante los asesinatos que venía cometiendo este grupo. Muchos pobladores se empezaron a desplazar desde antes, cuando les llegaban noticias de lo que venía ocurriendo en otras zonas del Bajo Atrato. Las operaciones Cacarica (de los paramilitares) y Génesis (del Ejército colombiano), las recuerdan como el momento en que más se estigmatizó a quienes estaban en las zonas rurales.

3.2 EL EJÉRCITO Y LOS PARAMILITARES: CACARICA Y GÉNESIS

La relación entre los grupos de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá en el Urabá y el Atrato con la Fuerza Pública fue estrecha. *El Alemán* afirmó en Justicia y Paz que:

A mí me llegaron a interceptar las (lanchas) pirañas del Ejército, cuando iba por el golfo (de Urabá) con hombres armados. Me preguntaban que quién era yo y les decía: soy el comandante Fredy Rendón, entonces me saludaban y me decían: 'Siga, no hay problema'. Igual, llegamos a viajar cuatro, cinco camionetas, llenas de hombres vestidos de civil con fusiles, desde Necoclí has-

ta Mutatá y cuando pasábamos por los retenes de la Policía, nos saludaban, nos decían: ‘Adelante’.

Del 23 de febrero al 5 de marzo de 1997 se ejecutó lo que los paramilitares denominaron la operación Cacarica, una incursión por el dominio del Bajo Atrato. Elmer Cárdenas y alias *Ramiro* se desplazaron con sus hombres por el río desde el municipio de Santa María a Cacarica. Los paramilitares se tomaron el pueblo, ingresaron al Parque Nacional Natural los Katíos e incursionaron a un lugar conocido como Bijao, donde asesinaron al líder afro Marino López Mena; pasaron luego por el río Perancho y de ahí al sector llamado Sanginio, donde hicieron contacto con el Ejército, que estaba en la operación Génesis.

La comunidad fue obligada a salir del territorio tres días antes. Según testimonios recolectados por la Comisión de la Verdad, la mayoría se fueron para Turbo, Antioquia, otros a Panamá y otros se quedaron en Bocas del Atrato. “Por esos días había terror, no estábamos acostumbrados a eso, éramos comunidades que vivíamos en paz. En mi comunidad los paramilitares llegaron haciendo disparos y lanzando granadas a las casas”, contó un líder social de Cacarica en el quinto Festival de las Memorias “Somos Génesis 2020”.

Mientras las comunidades se desplazaban por el Atrato, la brigada XVII, al mando del general Rito Alejo del Río, realizaba la operación Génesis, entre el 24 y 27 de febrero de 1997, en el área de los ríos Salaquí y Truandó. Esta operación fue paralela a la incursión paramilitar, cuyo objetivo era sacar a las Farc de los caños Cacarica, Salaquí y Truandó. Más de cuatrocientas personas fueron desplazadas.

En 2012 la Corte Suprema de Justicia condenó al general Del Río por el homicidio del líder Marino López Mena. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le concedió libertad condicional en septiembre de 2017, tras someterse a la justicia transicional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra del Estado colombiano en 2013, al afirmar que no había cumplido con sus obligaciones de prevención, protección e investigación tras las operaciones.

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró a Colombia responsable de la colabo-

ración de “miembros de la Fuerza Pública colombiana y la vinculación que existe entre aquella y las estructuras paramilitares en la región del Urabá”, por el despojo de tierras y el asesinato de Marino López Mena. La Corte le recomendó al Estado garantizar la restitución, el retorno seguro al territorio y “llevar adelante una investigación completa, imparcial, efectiva y pronta de los hechos para establecer y sancionar la responsabilidad intelectual y material de todas las personas que participaron en los hechos”.

En abril de 1997 las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, las Autodefensas del Magdalena Medio y la de los Llanos Orientales se unieron para conformar las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Según la investigación de “Macrocriminalidad con licencia legal: Urabá-Darién 1980-2004” de la organización no gubernamental Indepaz, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá dejaron de ser un proyecto únicamente militar, que tenía como objetivo complementar las actuaciones del Estado sin desafiarlo, para convertirse en un proyecto también político y económico. Ello implicaba el enfrentamiento y la captura de las instituciones estatales locales, regionales y nacionales.

Los paramilitares, ya conformados como las Autodefensas Unidas de Colombia, tuvieron el objetivo de crear condiciones de seguridad y control sobre la población para desarrollar y mantener la economía ganadera en el sur de Córdoba y el norte de Urabá, así como la expansión de la palma al bajo y medio Atrato. A lo que se sumó crear corredores seguros para el narcotráfico, concluye el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre el paramilitarismo.

Las alianzas que estableció Fredy Rendón, *el Alemán*, no fueron únicamente con la Fuerza Pública. En el año 2000, la casa Castaño materializó la injerencia política en el territorio por medio del Movimiento Urabá Grande, Unido y en Paz, bajo el lema: “Con pujanza y fortaleza construiremos para el año 2020 el progreso del futuro y de la tierra del futuro en la propia esquina de América, Urabá grande, solidaria, trabajadora y en paz”.

Los paramilitares apoyaron diversos candidatos, que iban desde las juntas de acción comunal hasta el Sena-

do, con el objetivo de que contribuyeran a cumplir las metas de las Autodefensas.

“Se le dice a Jorge Pinzón, váyase, reúnanse con ellos en la región de Urabá, instintivamente de cualquier partido político, se delega al señor Pinzón para que haga la elección de los líderes de la región que tenían poder en el eje bananero. Todos estos líderes fueron convocados a una gran reunión en el municipio de Necoclí donde se les vendió por primera vez la idea del proyecto político regional”, declaró Rendón en Justicia Paz en 2009.

En 2010 la justicia determinó que veintitrés personas elegidas popularmente pertenecían al movimiento y colaboraron con el bloque Elmer Cárdenas.

Como explica la investigadora Yamile Salinas Abdala, *el Alemán* también promovió el “Proyecto político para el Darién colombiano” o el “Pacto del Chocó”, con los mismos propósitos del Movimiento Urabá Grande, Unido y en Paz. Además logró, por medio de la Asociación Comunitaria de Urabá y Córdoba (Asocomún), una organización creada el 16 de febrero de 2002 por John Jairo Rendón Herrera, conocido como *Germán Monsalve* y hermano de *el Alemán*, gestionar recursos estatales y de cooperación internacional.

3.3 LOS PROYECTOS AGROINDUSTRIALES Y DE MINERÍA

De la mano de la casa Castaño al Bajo Atrato llegó el ambicioso plan de la palma de aceite. Paramilitares y narcotraficantes tomaron control sobre las tierras que Pablo Escobar y sus aliados habían dejado en el Urabá cordobés, antioqueño y el Darién. Ante este botín, Vi-

cente Castaño tuvo una idea que marcaría el futuro del país: la incursión del paramilitarismo en la agroindustria, especialmente en el cultivo de palma de aceite para la producción de agrodiésel. Lo hizo por medio de sus empresas fachada Urapalma S. A., Palmura S. A. y Extractoras de Bajirá S. A., constituidas por su amigo y socio Antonio Nel Zúñiga Caballero, empresario del Magdalena.

El proyecto palmero no llegó por casualidad al Bajo Atrato. Lo hizo durante los momentos más duros del conflicto armado. En Indonesia, Filipinas y Guatemala la palma fue utilizada como una estrategia de guerra, por su capacidad de bloquear el crecimiento de otras formas de vida. “Donde hay palma no entran ni ardillas, no entran las Farc”, asegura la investigadora Yamile Salinas Abdala. Modelo que se estableció en los consejos comunitarios de Jiguamiandó y Curvaradó.

El proyecto no solo utilizó tierra despojada, también se acopló bien a las zonas que habían sido deforestadas históricamente por la empresa Maderas del Darién, que desarrolló actividades en la zona entre 1992 y 2001, y ha sido acusada ante Justicia y Paz de haber financiado a los grupos paramilitares. Incluso, según información del Cinep, en 1996 paramilitares de la Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá se establecieron en un antiguo campamento de la maderera en la comunidad de La Pala.

El consejo comunitario de La Larga y Tumaradó ha tenido que presenciar no solo los proyectos de monocultivos de palma y la extracción maderera de los territorios. También se ha enfrentado a la violencia por oponerse a los proyectos minero-energéticos.

4

LA RECONFIGURACIÓN DEL CONFLICTO

El proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia inició en enero de 2003, en Santafé de Ralito, Córdoba. El bloque Elmer Cárdenas se retiró de la mesa de negociación y no admitió los acuerdos por diferencias con el Estado Mayor de la organización. En septiembre de 2005 volvió al proceso y se sometió a Justicia y Paz. El gobierno nacional, mediante resolución número 280 del 5 de octubre de 2005, declaró abierto el proceso de diálogo, negociación y acuerdos con el bloque. En junio de 2006 se desmovilizó la mayor parte de la estructura armada, 1.536 personas, entre ellos el comandante para ese momento, alias *el Alemán*.

Juan de Dios Úsuga, *Giovanny*, que había dejado las armas como miembro del EPL en 1996, se acogió a Justicia y Paz en 2004. Había pasado a formar parte del bloque Calima e incluso hizo parte del grupo que asesinó a Carlos Castaño, como lo determinó el Juzgado Adjunto al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia en marzo de 2011. Su hermano Dayro Antonio Úsuga, *Otoniel*, se desmovilizó del bloque Centauros.

Los Urabeños, hoy conocidos como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), es un grupo paramilitar creado en 2006 por Vicente Castaño y dos de sus lugartenientes, Ever Veloza García, *HH*, y Daniel Rendón Herrera, *don Mario*, hermano de *el Alemán*, cuando se

apartaron del proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia. Desde sus inicios ha delinquido en la zona del Urabá y el Darién, teniendo fuerte presencia en el Bajo Atrato.

Ante la desaparición y posible asesinato de Vicente Castaño en 2007, *don Mario* tomó las riendas del grupo criminal hasta su captura en 2009. Desde entonces los hermanos Úsuga se convirtieron en los líderes de la organización, aun cuando *Giovanni* murió en un operativo de la fuerza pública en enero de 2012, quedando como única cabeza de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia su hermano Dayro Antonio Úsuga, *Otoniel*.

Con la firma del Acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc, el Bajo Atrato pasó a ser disputado entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el ELN. Los combates entre estos dos grupos armados por el control del narcotráfico siguen dejando comunidades indígenas y afro desplazadas y asesinadas.

En la actualidad, la presencia del ELN ha disminuido y las AGC controlan el territorio. Esto ha traído la disminución en los enfrentamientos que dejan a las comunidades en medio. Sin embargo, las amenazas y la violencia se mantienen, así como la resistencia de quienes han habitado estos territorios durante décadas.

ACERCA DE LOS AUTORES

Santiago Luque Pérez. Periodista en proceso de grado por la Universidad del Rosario. Experiencia como reportero de Rutas del Conflicto desde hace dos años cubriendo conflictos socioambientales, violencia contra líderes sociales y atención en salud a víctimas del conflicto armado y personas en proceso de reincorporación.

Pilar Puentes Espinosa. Periodista por la Universidad del Rosario con tres años de experiencia en investigaciones relacionadas con apropiación irregular de la tierra, líderes sociales y contratación estatal. Ganadora del premio de la Excelencia Periodística de la Sociedad Interamericana de Prensa, 2019.

PIE DE IMPRENTA

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)
Calle 71 n° 11-90 | Bogotá-Colombia

Responsable

Kristina Birke Daniels
Directora del Proyecto Regional de Seguridad
y representante de la FES Colombia

Saruy Tolosa
Coordinador de proyectos
saruy.tolosa@fescol.org.co

Bogotá, diciembre de 2020

SOBRE ESTE PROYECTO

Presente en el país desde 1979, la Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia (Fescol) busca promover el análisis y el debate sobre políticas públicas, apoyar procesos de aprendizaje e intercambio con experiencias internacionales y dar visibilidad y reconocimiento a los esfuerzos en la construcción de paz.

Como fundación socialdemócrata, nos guían los valores de la libertad, la justicia y la solidaridad. Mediante nuestras actividades temáticas, ofrecemos un espacio de re-

flexión y análisis de la realidad nacional, promoviendo el trabajo en equipo y las alianzas institucionales con universidades, centros de pensamiento, medios de comunicación, organizaciones sociales y políticos progresistas. En el marco de estos esfuerzos desarrollamos grupos de trabajo con expertos (académicos y técnicos) y políticos, así como foros, seminarios y debates. Además, publicamos *policy papers*, análisis temáticos y libros.

Para más información, consulte

<https://www.fes-colombia.org>

El uso comercial de los materiales editados y publicados por la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) está prohibido sin autorización previa escrita de la FES.

EL BAJO ATRATO: UN CONFLICTO QUE SE PERPETÚA



La región del Bajo Atrato, en el noroccidente de Colombia, ha sido testigo del olvido estatal, la violencia de las guerrillas, los grupos paramilitares y la Fuerza Pública. En medio de estos conflictos históricos han aparecido los proyectos de palma que, en muchos casos, han utilizado terrenos arrebatados a las comunidades.

Para la investigadora Yamile Salinas estos cultivos no llegan por casualidad: en Indonesia, Malasia y Guatemala han sido utilizados como “armas de guerra” por su capacidad de bloquear la biodiversidad para proyectos



agroindustriales, agroforestales y minero energéticos. Son usados como una cerca verde.

En medio de este conflicto han quedado las comunidades, principalmente afro e indígenas, que con la Constitución de 1991 vieron la posibilidad de tener tituladas sus tierras. Sin embargo, lo único que han recibido es una violencia que no parece desaparecer. A lo que se suma que con el Acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las Farc llegó la disputa por este corredor del narcotráfico.